

Ficha Programática

PNSP (2025–2035)

Esta ficha sirve para describir una propuesta de programa. No es necesario tener formación técnica para completarla. En algunos ítems encontrará ejemplos o sugerencias para orientarse. En caso de dudas, consulte a los miembros de la Secretaría Técnica.

Información básica

Fecha de llenado: 28/10/2025

Nombre de la persona proponente: Dra. Mercedes Reyes y Dr. Juan Pablo Novella

Institución / organización (si aplica): **Iniciativa Personal**

Correo electrónico o contacto de referencia: mereyes@poderjudicial.gub.uy

1. Título del programa

Justicia con enfoque de género y derechos de infancia: fortalecimiento del Poder Judicial frente al microtráfico y las mujeres en situación de vulnerabilidad

2. Problema específico al que responde

El incremento sostenido del encarcelamiento de mujeres por delitos vinculados al microtráfico, en su mayoría madres jefas de hogar, evidencia una respuesta penal desproporcionada que agrava situaciones de pobreza y vulnerabilidad, impactando directamente en sus hijos e hijas.

La insuficiencia de recursos humanos y técnicos en el Poder Judicial limita la posibilidad de aplicar medidas alternativas y sanciones proporcionales, fundadas y con enfoque de derechos, contribuyendo al uso excesivo de la prisión preventiva y a la falta de alternativas reales al encarcelamiento.

3. Principales factores o causas del problema

- Escasez de recursos técnicos y presupuestales en el Poder Judicial para evaluar integralmente las condiciones sociales y familiares de las personas imputadas.
- Ausencia de equipos interdisciplinarios permanentes especializados en género, infancia y adicciones.
- Saturación del sistema de justicia con escaso apoyo técnico.
- Falta de coordinación institucional entre Poder Judicial, Ministerio del Interior, MIDES, MSP e INR.
- Invisibilización del impacto diferencial de la respuesta penal sobre mujeres y niños.

4. Objetivo principal del programa

Fortalecer la capacidad institucional y presupuestal del Poder Judicial para garantizar decisiones judiciales con enfoque de género y niñez en casos de microtráfico, reduciendo el uso de la prisión preventiva y promoviendo medidas alternativas efectivas.

5. Población objetivo

Mujeres en situación de vulnerabilidad imputadas por delitos de microtráfico y sus hijos e hijas menores de edad. Indirectamente: jueces, fiscales, defensores y técnicos del sistema de justicia penal.

6. Cobertura temporal y territorial

Duración: Permanente.

Territorio: Nacional, con implementación prioritaria en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rivera.

7. Descripción de las actividades a desarrollar

- Creación de equipos técnicos interdisciplinarios (trabajo social, psicología, criminología y género) en juzgados penales y de ejecución en coordinación con DINAMA.
- Elaboración de protocolos de actuación judicial con enfoque de género y derechos de infancia.
- Implementación de unidades judiciales de evaluación y seguimiento de medidas alternativas a la prisión.
- Realización de capacitaciones anuales obligatorias para operadores judiciales en derechos humanos, políticas de drogas, género y niñez.
- Desarrollo de un sistema de registro y monitoreo judicial sobre decisiones en casos de microtráfico y medidas alternativas.
- Coordinación interinstitucional con organismos del Poder Ejecutivo para garantizar la articulación de programas sociales y de reinserción.

8. Resultados esperados

- Reducción del número de mujeres privadas de libertad por delitos de microtráfico (actualmente 68 niños y niñas se encuentran junto con sus madres privadas de libertad, lo que destaca a Uruguay en la región y en el mundo de manera negativa)
- Mejora en la calidad de las decisiones judiciales, con fundamentación interdisciplinaria y perspectiva de género.
- Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa del Poder Judicial.
- Mayor protección de los derechos de niños y niñas cuyos cuidadores enfrentan procesos penales.

- Producción de información estadística y cualitativa para orientar la política criminal con base en evidencia.

9. Instituciones responsables y aliadas

Responsable principal: Poder Judicial.

Instituciones aliadas: Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de Rehabilitación - DINAMA, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública, INAU, Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Apoyo técnico: ONU Mujeres, ACNUDH, UNODC, Universidad de la República.

10. Recursos mínimos requeridos

Principales rubros de gasto:

1. Contratación de equipos técnicos interdisciplinarios.
2. Capacitación y formación especializada de operadores judiciales.
3. Desarrollo y mantenimiento del sistema de monitoreo judicial.
4. Producción de informes y evaluación de impacto.
5. Mejora de infraestructura y recursos para la toma de declaraciones de testigos protegidos, fortaleciendo la confidencialidad, los medios técnicos y el personal capacitado. Actualmente, el funcionamiento de estos dispositivos es deficitario, lo que afecta la eficacia de las investigaciones y la protección de las personas que cooperan con la justicia.

Monto total estimado:

Observaciones

- La propuesta se alinea con las Reglas de Bangkok, las Reglas Mandela, la Convención sobre los Derechos del Niño y la CEDAW, cumpliendo los compromisos internacionales del Estado uruguayo.
- El fortalecimiento presupuestal del Poder Judicial no implica asumir funciones del Poder Ejecutivo, sino garantizar su rol de garante de derechos, mejorando la eficacia de las políticas públicas en materia de drogas, género y justicia social.
- Se propone la evaluación del programa con indicadores de impacto en reducción del encarcelamiento femenino y en mejora de la calidad de las decisiones judiciales.

Reformas legislativas y fortalecimiento institucional:

El fortalecimiento del Poder Judicial frente al microtráfico y las mujeres en situación de vulnerabilidad requiere acompañarse de reformas normativas que aseguren decisiones judiciales proporcionales, respetuosas del principio de inocencia y alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos. Estas reformas deben contribuir a reducir

la reincidencia, mejorar las condiciones de reinserción y promover un uso racional de la prisión preventiva.

1) Salidas transitorias (Decreto-Ley 14.470): Se propone flexibilizar el artículo 63-BIS para permitir salidas transitorias por razones de estudio o trabajo, aun sin haber cumplido los dos tercios de la pena, cuando ello favorezca la reinserción y no represente riesgo relevante. La interpretación actual genera desigualdades entre personas privadas de libertad y obstaculiza el acceso a la educación terciaria, vulnerando las Reglas de Mandela y de Bangkok.

2) Libertad a prueba y principio de inocencia (art. 295 bis CPP): Se sugiere sustituir la expresión 'la sola formalización' por 'condena posterior' como causal de revocación, a fin de evitar afectaciones al principio de inocencia. Asimismo, se propone otorgar efecto suspensivo a la apelación contra la revocación de la libertad a prueba, garantizando un debido proceso.

3) Aplazamiento excepcional del cumplimiento de pena (art. 304.2 CPP): Se propone eliminar la exclusión de su aplicación en casos de reincidencia, reiteración o habitualidad, cuando existan problemas graves de salud. En la práctica, esta limitación resulta ineficaz y contraria al principio de humanidad de la pena.

4) Mujeres privadas de libertad y medidas alternativas (art. 228 lit. B CPP): Se recomienda ampliar las medidas alternativas para mujeres embarazadas o con hijos/as menores, eliminar exclusiones automáticas por reincidencia y considerar la eliminación de antecedentes judiciales a mujeres primarias, en línea con las Reglas de Bangkok y modelos comparados de Costa Rica y Colombia.

5) Fortalecimiento institucional frente al narcotráfico y lavado de activos: Se propone consolidar la coordinación entre JUTEP, SENACLAFT, la Fiscalía especializada y la UIAF del BCU, reforzando la trazabilidad de los activos vinculados al narcotráfico. El fortalecimiento de estas instituciones permite atacar las estructuras económicas del crimen organizado, mejorar la eficacia del sistema judicial y cumplir los compromisos asumidos ante GAFILAT, ONUDD y la OEA.

Estas reformas y fortalecimientos institucionales, en conjunto, buscan garantizar una justicia penal más equitativa, eficiente y coherente con los derechos humanos y la política criminal con enfoque de género.